

Henrique Monteagudo

Lenguas en Transición: de la represión a la convivencia

Antes de comenzar, debo resaltar una dificultad intrínseca al tema que pretendo abordar, y que deriva no tanto del asunto en sí mismo, que a primera vista apunta a ofrecer un bosquejo histórico de la evolución de la situación de las lenguas de España (permítanme suspender por un momento prejuicios ideológicos o de etiqueta para utilizar ahora esta cómoda denominación, y no la farragosa de 'Estado Español'), sino que es debida al marco en que está tratado, es decir en un simposio sobre 'La memoria literaria de la Transición española' realizado en Berlín. Junto a este dato téngase también en cuenta la referencia al hispanismo alemán en el horizonte de mis reflexiones. De ahí que, de acuerdo con el planteamiento general del libro, las páginas siguientes se refieran al conjunto de las lenguas del Estado y procuren ofrecer una panorámica global de estas.

A continuación poco más podrá pergeñarse que el bosquejo apresurado de una historia, que aún está por escribir con la debida profundidad y detalle, pero que en todo caso se adivina bastante compleja. Considerando un poco más en particular el momento central, esto es, el debate de la Constitución de 1978, se intentará aportar una información básica, adobada de alguna que otra reflexión personal, para comprender las dimensiones y la significación específica de eso que se ha denominado 'plurilingüismo español', con particular referencia a los cambios que la Transición democrática implicó en la configuración de éste, y con él, de la cultura lingüística española. Estoy seguro de que algunos lectores encontrarán redundantes parte de las informaciones que ofreceré, a otros les parecerán incompletas, y quizás otros más las encontrarán sesgadas. Soy consciente de que he tenido que dejar fuera muchos datos importantes y me he visto obligado a abocetar muy sumariamente cuestiones en las que los matices son cruciales, pero, aunque escribo desde una periferia que no se deja oír con frecuencia (la gallega), y desde el compromiso con la defensa y promoción de mi lengua, he procurado en todo momento guardar un punto de vista lo más objetivo y comprensivo posible.

Me referiré en primer lugar a la situación de partida, o mejor a los precedentes de la Transición, en los años anteriores al cambio de régimen; seguiré por un esquema de las posiciones glotopolíticas que surgieron con motivo de la discusión del texto constitucional, que representan las de amplios sectores de la sociedad y prefiguran debates de los años siguientes; posteriormente, bosquejaré los problemas de habilitación de las lenguas que fueron abordados en los años que nos interesan, y acabaré apuntando rápidamente a los procesos de normalización emprendidos desde cada comunidad autónoma, que, a partir de sus primeros pasos, se salen ya de los límites del tema propuesto.

1. Precedentes

Los precedentes de la Transición, también en el aspecto lingüístico, pueden retrotraerse a la década de los sesenta y los primeros setenta, coincidiendo con un lento aflojamiento de la política represiva del régimen franquista (véase Ninyoles 1977; Siguán 1992: 67–73).

1. *Precedentes culturales*. En los primeros años setenta, de cara al gran público, la problemática lingüística se manifestaba como un asunto básicamente cultural. En un primer momento, la difusión de las lenguas periféricas, incluso la noticia de su existencia para el público castellano-parlante, se producía en el terreno literario gracias sobre todo a ediciones bilingües (como el poemario *Longa noite de pedra / Larga noche de piedra*, del poeta gallego Celso Emilio Ferreiro, 1962). Hacia finales de la década de los sesenta, surgió el fenómeno de la *Nova Cançó*, que permitió que las voces de cantautores de ámbito lingüístico catalán como el valenciano Raimon, el catalán Joan Manuel Serrat o la balear Maria del Mar Bonet se unieran al coro de la canción protesta con audiencia en el conjunto de España, al lado de cantautores en castellano como Paco Ibáñez o Luis Eduardo Aute. Alrededor de mayo del 68, también surge en Galicia el movimiento ‘Voces ceibes’, que tuvo una gran repercusión en la concienciación lingüística de las élites universitarias, y en cuya estela se forjaron canciones de éxito popular en toda España. Otra vía de divulgación de las lenguas periféricas, en particular del catalán, en esos tiempos fue el teatro.

Al comienzo de la Transición, cantantes como el catalán Lluís Llach llenaban aforos en Madrid y otras ciudades no-catalanoparlantes y vendían miles de discos en toda España. El público español también acogía con los brazos abiertos representaciones de compañías teatrales catalanas, como

‘El Joglars’, aunque en este caso las representaciones se realizaban normalmente en castellano. Estas iniciativas constituyeron un paso adelante en un terreno hasta entonces vedado para las lenguas minoritarias: el ámbito de la cultura de masas. Tuvieron, además, la virtualidad de acercarlas al público castellano-hablante, que generalmente asociaba el repudio del régimen dictatorial con una cierta simpatía hacia las manifestaciones de las culturas minoritarias reprimidas.

2. *Precedentes del uso escolar de las lenguas.* Aunque el régimen había decretado la total exclusión de las lenguas periféricas del sistema educativo, ya en la década de los sesenta (1964), aparecían en el País Vasco las primeras *ikastolas*, escuelas cooperativas en que el eusquera era utilizado como lengua vehicular, sostenidas mediante aportaciones individuales y, en algún caso, con apoyo municipal. Las ikastolas se movían en una situación parao a-legal, pero el amplio apoyo popular que suscitaron, y en particular el respaldo eclesiástico a la cultura euskaldún, aconsejaba al régimen tolerarlas, lo que permitió que la fórmula experimentase una expansión notablemente rápida. De esta manera, en 1978, año de aprobación de la Constitución española, existían ya 150 ikastolas en el País Vasco, y en 1980, cuando entra en vigor el Estatuto de Autonomía de Euskadi, alcanzaban el número de 300, con unos 70.000 alumnos, de las cuales sesenta se ubicaban en Navarra y el País Vasco francés.

Por lo que respecta a Cataluña, la primera iniciativa importante en el terreno educativo fue la creación de la asociación pedagógica ‘Rosa Sensat’, que en los años siguientes jugaría un papel protagonista en la promoción de la enseñanza del catalán y en catalán. En 1966 se inauguraban las Escoles d’Estiu (Escuelas de Verano), una iniciativa crucial para la formación del profesorado y la promoción de experiencias de catalanización de la enseñanza. En 1969 la Escola d’Estiu tenía matriculados más de 1.600 alumnos. En el curso 1967–68 comienza a autorizarse tímidamente la enseñanza optativa del catalán en centros privados, pero entonces aún eran pocos los centros que se acogían a esta posibilidad.

En Galicia, aunque en las décadas anteriores no faltan iniciativas modestas de particulares y de maestros individuales, sólo se produjeron avances perceptibles en la galleguización de la enseñanza a partir de la Ley General de Educación de 1970, con la que comienza la etapa ‘aperturista’ del régimen. Esta ley, en efecto, abre una estrecha puerta a la introducción de las lenguas periféricas en el sistema educativo, al prever la posibilidad de enseñanza optativa de las mismas en los centros de enseñanza, aunque fuera de los horarios oficiales. Sin embargo, el desarrollo de esta previsión legal

se demoró hasta 1975, ya en los estertores del franquismo, cuando se publica un decreto (núm. 1422/75, de 30 de mayo) dirigido a “favorecer la integración escolar del alumno que ha recibido como materna una lengua distinta a la nacional”, para lo que se autoriza a los centros de educación preescolar y educación general básica a incluir, con carácter experimental y voluntario “la enseñanza de las lenguas nativas españolas”. Con todo, el decreto especifica que tal enseñanza “tenderá a asegurar el fácil acceso al castellano, lengua nacional y oficial” de los alumnos (García Negro 1991: 368–69).

3. *Aperturismo político del régimen moribundo*. El decreto que acabamos de citar constituye uno de los síntomas del ‘aperturismo’ del régimen, una estrategia de contención ante el incremento de las demandas democráticas, por medio del cual el franquismo pretendía perpetuarse a costa de minúsculas concesiones liberalizadoras. El mismo año de 1975 se publica otro decreto (número 2929/75, de 31 de octubre), por el que “se regula el uso de las lenguas regionales españolas” por parte de la Administración del Estado, de los Organismos, Entidades y particulares. Su criterio inspirador, en sus propias palabras, era “respetar y amparar el cultivo” de aquellas lenguas. Esta disposición ministerial establece que “el conocimiento y uso de estas lenguas será amparado y protegido por la acción del Estado” y autoriza su utilización “por todos los medios de difusión de la palabra oral y escrita”, pero reserva taxativamente para el castellano “como idioma oficial de la Nación, y vehículo de comunicación de todos los españoles” el uso “en todas las actuaciones de los Altos Órganos del Estado, Administración Pública, Administración de Justicia, Entidades Locales y demás Corporaciones de Derecho Público”. Igualmente, se dispone que el castellano “será el idioma utilizado en cualesquiera escritos o peticiones que a los mismos [los organismos públicos] se dirijan o que de ellos emanen”. Como se ve, el cambio con respecto a la política vigente en los casi cuarenta años de dictadura consistía en que se levantaban oficial y formalmente las restricciones al uso público de las lenguas periféricas, pero el castellano se reafirmaba como único idioma oficial en cualquier nivel o manifestación de la administración pública (García Negro 1991: 369–71). En definitiva, el decreto de 1975 representaba la culminación de una evolución del régimen, iniciada en la década de los setenta, que suponía el paso de una política lingüística represiva a otra de mínima tolerancia. Por lo tanto, asistimos al paso de una política represiva a otra de transigencia más o menos forzada.

2. El momento de inflexión: la Constitución de 1978

Al amparo de la tímida liberalización impulsada por el 'aperturismo', el mismo año de 1975 comienza a publicarse el primer diario en lengua catalana, *Avui*, y al año siguiente se crea 'Radio 4', la primera emisora de radio de carácter general que emite íntegramente en catalán desde 1939. En el mismo 1976 el número de títulos publicados en catalán (855) alcanza por primera vez en décadas la cifra de 1936, y la programación de teatro en catalán supera por primera vez la de teatro en castellano en la ciudad de Barcelona (Vallverdú 1992: 35–36). Por otra parte, la emisora pública estatal TVE con sus dos canales (que entonces era la única autorizada), comenzaba a dar cabida a las lenguas periféricas, con desconexiones a sus centros regionales bien en su primer canal (una hora diaria aproximadamente) bien en el segundo (16 horas semanales en catalán ya en 1977). En el año 1976, en Galicia aparece la revista *Teima*, el primer mensual en gallego desde 1936, y en 1977 comienza a publicarse el semanario de información política *A Nosa Terra*, el primero desde 1936 editado íntegramente en la lengua del país.

Durante los años más intensos de la transición política (1976–77), se despertó un animado activismo político-cultural que supuso una especie de explosión de la presencia pública de las lenguas hasta entonces amorzadas (correlativa a la conquista de una libertad de expresión largamente reprimida), a la que contribuyeron un amplio registro de grupos cívicos (desde partidos políticos a asociaciones de vecinos), y que se realizó a través de los medios más diversos: conferencias, mesas redondas y debates, mítines, actuaciones teatrales y musicales, producciones discográficas, publicaciones variadas (carteles y pósters, boletines de partidos políticos o asociaciones culturales, revistas juveniles, etcétera), emisiones radiofónicas, etcétera. De esta manera, la producción cultural en las lenguas periféricas se diversificó y se masificó notablemente, y lo mismo ocurrió con sus públicos y sus audiencias.

Todo lo anterior se produjo en medio de una intensa politización de la vida ciudadana, y también de las reivindicaciones lingüísticas. En las nacionalidades periféricas, a las exigencias democráticas iban inseparablemente unidas las reclamaciones de autonomía política y el reconocimiento de las respectivas lenguas y culturas, y esto no sólo para los partidos nacionalistas estrictos, sino para la generalidad de los grupos de oposición democrática. Por su parte, el conjunto de la opinión democrática española comprendía y apoyaba esas reclamaciones, y veía con simpatía los esfuerzos de dignificación y difusión de las culturas autóctonas. Los mismos reformistas que provenían del franquismo y que se encargaron de dismantlar

el régimen aceptaban que esas reivindicaciones debían ser atendidas y se mostraban dispuestos a integrarlas en el nuevo orden democrático que se hallaba en proceso de gestación consensuada. Del acuerdo de unos y otros, aunque con la oposición de las extremas derecha e izquierda y con la exclusión del grueso del nacionalismo vasco y de los exigüos sectores radicales de los nacionalismos gallego y catalán, nació la Constitución de 1978.

Teniendo en mente los Decretos de 1975 a que nos referimos antes es más fácil calibrar el cambio que supuso la Constitución de 1978 en el encaje de la realidad del plurilingüismo español en el ordenamiento legal e institucional del Estado. La redacción definitiva del artículo 3º de la Constitución reza:

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Como se ve, este artículo, además de consagrar la preeminencia del castellano como lengua oficial del Estado, de obligado conocimiento para todos los ciudadanos, abre la puerta a la cooficialidad de las demás lenguas españolas, difiriendo el reconocimiento efectivo de ésta al momento de aprobación de los respectivos Estatutos de Autonomía de cada comunidad, y transfiriendo a dichos Estatutos la concreción de sus términos. Con su organización en tres párrafos, el propio artículo establece una clara jerarquía en cuanto al encaje constitucional de la variedad lingüística del país: en primer lugar estará el castellano, en segundo lugar las otras lenguas españolas reconocidas como cooficiales por los respectivos Estatutos, en tercer lugar, las diversas modalidades lingüísticas no contempladas en los apartados anteriores (esto incluye el asturiano o bable, las fablas aragonesas, el aranés, e incluso los dialectos del castellano).

Cada uno de los tres apartados de este artículo fueron objeto de debate durante la elaboración del proyecto de Constitución (González Ollé 1995: 57–61 y García Negro 1991: 239–264). Una revisión rápida de estas discusiones puede ser de utilidad para hacernos una idea de cómo se veía en aquellos años desde el ámbito estrictamente político la cuestión del plurilingüismo. En sustancia, tres fueron los aspectos discutidos: primero, el estatus relativo del castellano y las demás lenguas en los territorios autónomos, con especial incidencia en la cuestión del ‘deber’ de conocimiento

de aquel; segundo, la denominación del idioma oficial del estado, ‘castellano’ o ‘español’ (como veremos, la opción por una u otra denominación tenía unas connotaciones muy especiales); en tercer lugar, el estatuto de las variedades lingüísticas no incluidas en los apartados anteriores.

Respecto de la primera cuestión, se detectan tres posiciones diferentes: una más bien de reafirmación tajante de la primacía del español (protagonizada por Alianza Popular, o sea la derecha pos-franquista); otra consensualista, que consideraba que esta estaba garantizada por el texto articulado (el grueso de la Unión de Centro Democrático y del Partido Socialista); y otra igualitarista, que pretendía reforzar las garantías para las lenguas de las autonomías o incluso equiparar su estatus con el de la lengua del Estado (socialistas catalanes y nacionalistas vascos y catalanes). Acabamos de señalar que la posición reactiva en defensa de la preeminencia del castellano estuvo cabalmente representada por la pos-franquista Alianza Popular, pero la verdad es que en apoyo de esta concurrieron otros sectores. Por ejemplo, el senador Azcárate Flórez, que había sido diputado de la IIª República, pretendía retomar una previsión contenida en la Constitución republicana de 1931, al incluir en el apartado segundo un párrafo severamente limitativo del alcance de la cooficialidad de las otras lenguas: “Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional.”

Las objeciones más claras al texto del proyecto provinieron, sin embargo, de los representantes de la periferia, no necesariamente nacionalistas. Por ejemplo, el grupo parlamentario de socialistas de Cataluña proponía añadir al apartado segundo: “Los poderes públicos pondrán los medios para que todos los residentes en los territorios autónomos conozcan la lengua respectiva y garantizarán el derecho a usarla”. Francisco Letamendia, de Euskadiko Eskerra, por su parte, pretendía que la oficialidad de las otras lenguas quedase ya definida en la propia Constitución: “Las demás lenguas del Estado serán también oficiales en su ámbito territorial respectivo”. Más rotundo, el senador Audet Puncernau, de Esquerra Republicana de Cataluña, proponía redactar de esta manera el apartado primero: “Todas las lenguas nacionales serán oficiales en sus respectivos territorios. El castellano será la lengua oficial de los órganos del Estado, sin perjuicio de lo que dispongan los Estatutos de autonomía que se establezcan”. Esta última propuesta, además de buscar la declaración simultánea de oficialidad de todas las lenguas de España, apuntaba claramente a un modelo de oficialidad territorial, según el cual el castellano conservaría su carácter de lengua oficial de los órganos comunes del Estado y en los territorios castellano-hablantes, mientras que cada una de las otras lenguas se constituía, en principio, en la lengua oficial del respectivo territorio.

Otra cuestión también intensamente debatida fue la de la denominación de la lengua oficial del Estado. El texto elaborado por la ponencia se refería al comienzo del apartado primero al “castellano como lengua oficial del Estado”. Ya durante la discusión en el Congreso, Alianza Popular había manifestado que la constitución debía reconocer “una lengua oficial y común para todos los españoles, y esa lengua debe llamarse *español*”. A esto respondió el ponente del Partido Socialista que “la denominación de *español* en la Constitución puede producir y produce de hecho una politización de la lengua, y desvirtúa la existencia de otras lenguas en España”. Antes de pasar la discusión del proyecto constitucional al Senado, la Reales Academias de la Lengua y de la Historia solicitaron que en éste se recogiera la sinonimia entre las denominaciones ‘castellano’ y ‘español’. Varios senadores muy significados recogieron esta petición, que fue conducida a la discusión en sede parlamentaria por el senador, escritor y miembro de la Academia de la Lengua, Camilo José Cela, al proponer la siguiente redacción del apartado primero: “El castellano o español es la lengua oficial del Estado y común de todos los españoles, quienes tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.” El senador catalanista de izquierda Josep Benet explicaba su oposición a incluir la denominación ‘español’ asegurando que “será aplaudida por los separatistas de Cataluña, como creo que lo será por los de Euskadi y Galicia”. Este debate evidencia la fuerte carga connotativa y simbólica del nombre de la lengua (González Ollé 1993). La solución al problema de la denominación del idioma oficial del Estado no deja de ser curiosa: la Constitución, como hemos visto, se refiere al “castellano” como “lengua española oficial del Estado”.

Con respecto al apartado tercero, y para acabar, recogemos la posición de un diputado aragonés, que proponía añadirle una especificación que reconociese que las modalidades lingüísticas de España podrían también ser usadas con “carácter de oficialidad en los municipios, comarcas o ámbitos en que se utilicen normalmente”, bastando para ello con que “lo soliciten los órganos representativos correspondientes a cada ámbito”. La propuesta fue desestimada, lo cual cerró la vía para el uso no sólo de las modalidades asturianas y aragonesas en las instituciones locales de las comarcas y municipios, sino también de las variedades fronterizas del catalán y el gallego, habladas fuera de los límites administrativos de las respectivas comunidades autónomas.

En definitiva, con todas las cautelas aplicadas a consagrar la prioridad del castellano sobre las demás lenguas, al abrir paso para el reconocimiento de éstas en el nivel territorial de las comunidades autónomas, con la Constitución de 1978 se iniciaba la transición lingüística *de iure*. Al mismo

tiempo, dado que esta no explicita cuáles son esas lenguas y deja (creemos que con buen criterio) la determinación concreta del alcance de la oficialidad de cada lengua al Estatuto de Autonomía de la comunidad correspondiente, sólo con la aprobación de estos Estatutos podemos considerar dicha transición encauzada. Independientemente de las observaciones que se puedan desarrollar al modelo lingüístico esbozado en sus líneas fundamentales por la Constitución de 1978, un asunto que quedó patente durante el debate constitucional fue que, a pesar de las apariencias y del esfuerzo por mantener el consenso entre las principales fuerzas políticas, las resistencias a la promoción de las 'otras' lenguas de España estaban más enraizadas y extendidas de lo que se quería creer. Y estas resistencias tuvieron, y tendrán en los años por venir, como protagonistas a instituciones de la importancia cultural y simbólica de la Real Academia y a intelectuales y escritores con gran autoridad y amplia audiencia, con enorme capacidad, por lo tanto, de influir en la opinión pública castellano-hablante (véase por ejemplo Salvador 1987 o Lodares 2000 y 2001). En mi opinión, esto constituyó un obstáculo formidable para la consolidación de una cultura lingüística común, basada en la convivencia libre e igualitaria, el respeto y el mutuo reconocimiento entre los distintos grupos lingüísticos del Estado.

Dicho lo anterior, también hay que reconocer que los conflictos a que dio lugar el nuevo ordenamiento lingüístico español, especialmente tras la aprobación de los Estatutos de Autonomía, eran en parte inevitables, y en todo caso, salvo excepciones muy puntuales, no revistieron gravedad.

3. Caracterización de las lenguas.

La normativización, una tarea de la Transición

Una de las novedades que posibilitó el sistema democrático español fue la realización de censos e inquéritos lingüísticos (véase Siguán 1994 y 1999), que son un instrumento de la mayor importancia para tener un conocimiento mínimamente aproximado de la realidad, algo de lo que carecían los estudiosos y los responsables políticos antes de la década de los 80 (Ninyoles 1977). Eso y los estudios de cartografía lingüística desarrollados por las universidades, nos permiten dar una visión general de las dimensiones territorial y demográfica de cada uno de los grupos lingüísticos (véase en los anexos, tabla 1). Como se puede deducir de estos datos, algo más del cuarenta por ciento de la población española reside en territorios bilingües (esto es, en los que es cooficial una lengua distinta al castellano), y casi el veinte por ciento de los ciudadanos españoles tiene como lengua propia

otra distinta al castellano (incluimos en ese porcentaje a los bilingües iniciales, que representan aproximadamente la cuarta parte de éstos). Esto convierte a España en el país de la Unión Europea (con excepción de Bélgica) con una base lingüística más diversificada. Sin embargo, esto no significa que España sea un país de tipo 'balcánico', pues el conocimiento y la utilización de la lengua común del Estado, el castellano, por parte de los demás grupos lingüísticos tienen una larga tradición histórica, están en la actualidad ampliamente generalizados y no están contestados más que por sectores muy minoritarios.

Por otra parte, las lenguas minoritarias, eclipsadas por la expansión histórica de la lengua del Estado, fueron objeto desde el siglo XIX de esfuerzos de defensa, promoción y cultivo. Pero, excepto el catalán, antes de la guerra de 1936-39 y la consiguiente dictadura franquista, que impuso un frenazo a los respectivos procesos de elevación de estas lenguas, no habían terminado de cuajar las variedades cultas respectivas, lo cual opuso problemas específicos a estas lenguas, problemas que tuvieron que ser abordados en el período que nos interesa. Nos referiremos, pues, a los avances y problemas que presentó y presenta la estandarización de estas (sobre esto, además de las notas que ofrecen Siguán 1992 y Etxebarria 2002, pueden verse los trabajos específicos para cada lengua recogidos en Alvar 1986 y VV. AA. 1996).

En realidad, los problemas de tipo normativo, que frecuentemente se relacionan con los de la unidad del idioma, afectan a todas las lenguas de España, aunque con muy desigual intensidad y efectos. En todas partes se sienten los problemas de corrección idiomática y adaptación de la lengua normativa a los medios de comunicación, sobre todo orales y audiovisuales, y la crisis de 'autoridad' de la norma culta. En general, chocan ahí actitudes más rigoristas con otras más laxistas; y con esto se entrelaza la cuestión del purismo. Pero la cuestión normativa se siente con especial agudeza en lenguas aún inestables, con dificultades para la difusión de su variedad culta y sometidas a la fuerte presión asimiladora de un omnipresente castellano. Naturalmente, esto afecta muy específicamente a la creación literaria y a la recepción de esta por parte del público.

Dejamos aparte el caso de la lengua del castellano, tanto en relación con las 'hablas andaluzas' como en lo que atañe a las variedades de las Américas, y nos centramos en las lenguas minorizadas. En todas estas, los procesos de promoción política que abrió la transición política se vieron acompañadas de polémicas, a veces muy virulentas, sobre la variedad culta, que afectan de uno u otro modo a la identidad de la lengua. Las discusiones sobre la autoridad normativa y sobre la modalidad modelo, frecuentemente

centradas en la ortografía, constituyen un obstáculo que puede ser muy grave para la normalización social de la lengua, como muestran el caso del valenciano, y, en menor medida, del gallego.

En los comienzos del período que nos interesa, la normativización de la lengua catalana se encontraba, en líneas generales, considerablemente consolidada, sobre todo si comparamos su situación con la del gallego y el eusquera. Como es sabido, ya en 1911 se había creado el *Institut d'Estudis Catalans*, con una sección de filología encargada de fijar la normativa ortográfica y gramatical del catalán y elaborar un diccionario de referencia. Se puede decir que desde 1932 (coincidiendo con el establecimiento del Estatuto de Autonomía de la República) el asunto estaba resuelto, cuando menos en lo que se refiere a Cataluña y las Islas Baleares, pues habían sido aprobadas las normas ortográficas, existía una gramática de referencia y se había publicado un *Diccionari General de la Llengua Catalana*. De este modo, cuando en 1980 se restauró la oficialidad, en el caso del catalán los aspectos fundamentales de constitución de la norma se encontraban razonablemente resueltos, y en Cataluña, los debates giraron en torno al modelo de lengua de los medios de comunicación, en donde se enfrentaron dos concepciones, una más rigurosa y defensiva frente al castellano, frente a otra más flexible.

Los problemas más serios surgieron fuera de Cataluña, pues mientras en las Islas Baleares la aceptación de la norma culta es pacífica, en Valencia estalló una polémica violenta, alimentada por las aspiraciones escisionistas de un sector fuertemente anti-catalán y, en el fondo, decididamente pro-castellanista. Se trata de una controversia trufada de intereses político-culturales de baja altura, que se apoyan en la manipulación demagógica de prejuicios populares, pero que en definitiva constituyó un obstáculo muy serio para la promoción de la lengua.

En el caso del eusquera, la variedad de dialectos hablados había dado lugar a la existencia de diversas modalidades literarias. Tres son las más importantes: el primero en experimentar cultivo literario fue el dialecto labortano (del País Vasco francés), en el siglo XVII; a éste le siguieron sucesivamente el guipuzcoano (a partir del siglo XVIII) y el vizcaíno (a partir del siglo XIX). La Academia de la Lengua Vasca, creada en 1918, elaboró y promovió desde 1968 una modalidad unificada (*euskera batua*), basada fundamentalmente en el dialecto guipuzcoano (Sarasola en VV. AA. 1996: 73-81), aunque con especial atención al labortano. Aunque no faltaron defensores de las modalidades dialectales, el modelo *batua* gozó de una rápida aceptación, especialmente al sur de los Pirineos. Con la oficialización del eusquera en la Comunidad autónoma vasca y la Comunidad

foral de Navarra y el consiguiente uso en la administración, el sistema educativo y los medios de comunicación euskaldunes, se puede considerar completamente establecida en la escritura y la comunicación pública.

El gallego presenta, por su parte, una situación peculiar. En este caso la fragmentación dialectal del idioma es relativamente poco importante, pero, aun contando con una tradición literaria notable (desde el siglo XIX) y con una Academia propia desde 1906, hasta la posguerra no se dieron pasos decisivos en el camino de la constitución de una variedad culta unificada. Los años setenta y primeros de los ochenta del siglo pasado fueron pródigos en propuestas, empezando por la de la propia Academia Gallega (1970/71); pero sólo en 1982 se elaboraron y oficializaron unas *Normas ortográficas y morfológicas* sistemáticas y completas, que, con todo, vienen siendo puestas en cuestión por un sector significativo del nacionalismo. A finales de la década de los setenta surgió un movimiento reintegracionista, que defiende una aproximación ortográfica al portugués en diversos grados o, en sus versiones más radicales, la adopción de éste como lengua culta. También en Galicia las polémicas normativas fueron agudas y resultaron dañinas para la promoción de la lengua, aunque en un grado muy inferior al de Valencia, pues, a diferencia de lo que ocurre aquí, en Galicia la conciencia de diferenciación con respecto al portugués es maciza, no tendenciosa y va unida a una adhesión sincera al idioma del país, de modo que la defensa y elaboración de un modelo de lengua autónomo cuenta con una fuerte tradición y un respaldo ampliamente mayoritario.

La elaboración, codificación y difusión de las variedades normativas de las lenguas periféricas tuvo lugar en unas condiciones bien distintas a la decantación del castellano culto: en el caso de los primeros, los procesos históricos fueron mucho más rápidos y en ellos resultó muy visible la enérgica intervención de instituciones idiomáticas e administraciones públicas; en el caso del segundo, la evolución fue mucho más larga, y las intervenciones 'externas' fueron más espaciadas y puntuales. Pero, sobre todo, la adopción del castellano culto por parte de sus hablantes actuales aparece como un hecho normal y espontáneo, pues éstos reciben la situación lingüística del castellano como un dato, como una situación natural. Por el contrario, los hablantes de las otras lenguas, al ser espectadores (y partícipes) de un proceso en marcha, perciben con mucha más claridad la 'artificialidad' de ese proceso y del producto resultante, esto es, la lengua culta y en general la variedad-modelo.

A los detractores de los avances en la normalización de las lenguas periféricas se les ofrece aquí un argumento profusamente utilizado, incluso por lingüistas profesionales, que descalifican las modalidades unificadas de

aquéllas como inventos o engendros artificiales: “el vasco no es una lengua sino una familia de ellas, con ocho plenamente diferenciadas e ininteligibles entre sí ... Por eso, para mantener la entelequia de la supuesta unidad vasca, han inventado el batúa” (Salvador 1987: 20); “[e]l artificioso gallego de laboratorio que están fabricando los jóvenes galleguistas compostelanos, castellano-hablantes generalmente por tradición familiar, que están dispuestos a sustituir su materna lengua española por esa jerga que se construyen” (Salvador 1987: 22).

Lo cierto es que, pese a las polémicas y a los problemas en relación con el modelo idiomático de los medios de comunicación y a despecho de a la crisis de autoridad de las normas cultas (general en las lenguas de occidente), los hablantes de las respectivas lenguas parecen aceptar sin grandes problemas la necesidad de utilización de una modalidad unificada en la escritura y en la comunicación formal, y, gracias a la difusión de ésta en los centros de enseñanza, la prensa, la radio y la televisión, van superando con normalidad (sobre todo las nuevas generaciones) la sensación de artificialidad que ésta les puede producir de primera impresión.

4. De la transición a la normalización: políticas lingüísticas de las autonomías

Tomando la Constitución como punto de partida, hemos puesto fecha de inicio de la transición lingüística en 1978. Nos resta añadir que en los años 1978 y 1979, inmediatamente antes y después de la aprobación de la Constitución y previamente a la aprobación de los primeros estatutos de autonomía, el Gobierno central dictó decretos de bilingüismo que permitieron la introducción progresiva y generalizada en los centros de enseñanza (tanto públicos como privados) de Cataluña, País Vasco y Galicia, con carácter obligatorio, del estudio del catalán (1978), del euskera y el gallego (1979) en los ciclos básico y medio. Los mismos decretos abrían la posibilidad para el uso vehicular de estas lenguas, aunque con carácter optativo y en condiciones más restrictivas. Éste era un paso de innegable importancia en la difusión del conocimiento de los idiomas minoritarios, que además facilitaba la tarea futura de los gobiernos autónomos que se establecerían en los años inmediatamente posteriores. Una similar filosofía pluralista inspira el ‘Informe sobre enseñanza de las lenguas y bilingüismo’ elaborado en 1982 a instancia del Ministerio de Educación del Gobierno español por expertos de todos los ámbitos lingüísticos, incluido, lo que me parece especialmente destacable, el castellano-parlante (García Negro 1991: 377–

388). Esta iniciativa representa una vía de reflexión conjunta y colaboración entre todas las partes que ni el Gobierno central ni los autónomos debieron, a nuestro entender, dejar de lado.

Pero el segundo momento decisivo de la transición lingüística, después de la Constitución de 1978, lo marca, sin duda, la aprobación de los Estatutos de Autonomía, primero de las llamadas 'nacionalidades históricas', Euskadi, Cataluña y Galicia (1979/80), y luego de las demás comunidades autónomas, incluidas Valencia, Baleares y Navarra (1983). En los tres primeros estatutos se declara la lengua respectiva como 'lengua propia' de la comunidad, y en cada uno de los seis se compromete a las instituciones autónomas (en particular a los gobiernos) a la promoción de su enseñanza y de su utilización en todos los planos de la vida pública, cultural e informativa, al tiempo que se explicita el principio de no discriminación de los ciudadanos por razón de lengua.

Ya en el marco de la España autonómica, a la aprobación de los Estatutos de Autonomía siguen las leyes de normalización lingüística de las tres antedichas nacionalidades históricas y las análogas de las otras tres, leyes que fueron promulgadas entre 1982 y 1986 (véase Abad Licerias y Carmona Cuenca 1999). En todas ellas se señalan como ámbitos prioritarios de actuación la enseñanza, las administraciones públicas (especialmente las autonómicas y las locales), los medios de comunicación y la vida cultural. A partir de ahí, se van diseñando modelos de educación bilingüe peculiares a cada comunidad, se crean cadenas de radio y televisión de titularidad autonómica (con diferentes niveles de presencia de las lenguas propias), y se potencia el uso de los respectivos idiomas en la edición y la prensa. Ofrecemos en tablas anexas una idea general de en qué consisten esos modelos, las fechas de creación de los respectivos canales de televisión, y una estimación cuantitativa, en número de títulos editados en cada lengua a lo largo de los veinte años que van de 1980 a 2000. Pero ofrecer un balance de este período, aunque sea en bosquejo, nos obligaría a salirnos del marco fijado para nuestra intervención, de manera que presentamos estos datos a título meramente indicativo (para esto, puede consultarse Hoffmann 1996a y 1996b). En nuestra opinión, el año de 1986, cuando se cierra el primer ciclo de 'leyes de normalización lingüística', puede servirnos de mojón para considerar cerrado o en vías de cerrarse el período de transición que nos ocupa.

A partir de la constitución de los gobiernos autónomos comienzan también a aflorar las resistencias y la conflictividad social, especialmente a iniciativa de sectores castellano-hablantes de las comunidades periféricas, y también los litigios jurídicos, en los que habitualmente fue el Gobierno

central el que llevó la voz cantante. Un hecho característico de lo primero lo constituyó el *Manifiesto a favor de la lengua castellana amenazada en Cataluña*, publicado en 1981, respaldado con la firma de 2.300 residentes allí. No menos características fueron las reacciones a que este manifiesto dio lugar, por una parte con agresiones violentas a algunos suscribientes, y por otra con la aparición de un grupo directamente rival del anterior, la *Crida a la solidaritat*. La verdad es que los detractores de los procesos de normalización lingüística, fuesen residentes en territorios bilingües fuesen habitantes de la España castellano-parlante, alcanzaron un eco mucho mayor en el centro que en la periferia y raramente consiguieron articular plataformas mínimamente estables. Al contrario, sus protestas contribuyeron a suscitar movimientos de respuesta en defensa de las lenguas minorizadas con notable protagonismo público en las comunidades correspondientes, como la propia *Crida* o la gallega *Mesa pola Normalización Lingüística*.

Por lo que se refiere a la conflictividad jurídica, no se puede olvidar que las leyes de normalización lingüística del País Vasco, Cataluña y Galicia fueron objeto de recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central, con lo cual se inauguraba un frente pródigo en novedades en los años siguientes, lo que dio notable trabajo a los jueces. Como dejamos dicho atrás, el Tribunal Constitucional dictaminó sobre estos recursos en 1986, estimando en parte sus alegaciones, pero al mismo tiempo ratificando en lo esencial la constitucionalidad de dichas leyes. Aquí tenemos un argumento más para marcar ese año como límite de la 'transición lingüística', y cerrar aquí nuestra intervención.

Echando una mirada retrospectiva, los cambios producidos en la realidad y en la cultura lingüísticas de España durante la Transición se pueden resumir en lo siguiente: (1) el marco jurídico-legal del Estado se transformó de represivo (o todo lo más tolerante) a pluralista, pero la cultura lingüística de la comunidad mayoritaria (castellano-hablante) se resistió a asumir cabalmente esta transformación, y aún persisten en ella sectores fuertemente reticentes al reconocimiento de la diversidad, cuando no abiertamente apegados a sus privilegios históricos; (2) la problemática lingüística pasó de ser considerada una cuestión básicamente cultural a una básicamente política; (3) las culturas de expresión lingüística periférica pasaron de tener un carácter básicamente resistencialista y elitista a convertirse en culturas competitivas y de masas, si bien esta transformación tuvo que apoyarse en un fuerte respaldo público y no ha acabado de completarse.

Pero que acabemos nuestra intervención en 1986 no significa que la transición lingüística puede darse todavía por cerrada, pues, como dijimos

al principio, los ciclos de la vida de las lenguas son de 'onda larga'. Además, aún quedan muchos cabos sueltos y situaciones indecisas, de manera que es difícil pronosticar el horizonte final al que nos dirigimos. No queremos finalizar, con todo, sin exponer unas rápidas reflexiones. La primera se refiere a la constatación del profundo cambio operado durante estos años en cuanto al reconocimiento institucional y social del plurilingüismo español, y las enormes consecuencias que esto ha tenido sobre la nueva configuración de la cultura española o, si se prefiere, de la pluralidad de las culturas de España. La segunda, es que, sin ignorar los problemas y tensiones que acompañaron este cambio, no se puede negar que han sido y son más bien de baja intensidad, y por lo tanto, en general tolerables (excepción hecha del fenómeno terrorista, que sólo remotamente se relaciona con nuestro asunto). La tercera reflexión se refiere a la necesidad de asentar en España, de manera especial (pero no sólo) en las regiones castellano-parlantes monolingües, una cultura lingüística renovada.

Una cultura compartida por el conjunto de la población que debe partir de un conocimiento más veraz y documentado de la realidad lingüística española, y fundarse en el mutuo reconocimiento tanto entre las comunidades lingüísticas como entre los hablantes. Ese mejor conocimiento debe servir de apoyo a una actitud respetuosa hacia la diversidad lingüística, y mejor aún, comprensiva hacia las lenguas amenazadas y las minorías lingüísticas. La tarea de promover esta cultura lingüística le corresponde sobre todo a las autoridades e instituciones del Estado, en particular al sistema educativo, pero también a los medios de comunicación y los intelectuales castellano-hablantes. Pero los gobiernos autónomos de comunidades con lengua propia y los propios intelectuales y hablantes de éstas no debieran hacerse los desentendidos.

Una última reflexión que viene especialmente a cuento en un encuentro como éste, en el que participan las distintas literaturas de España. El ámbito literario es desde hace tiempo uno de los que más ha contribuido a la forja de la cultura lingüística común que acabamos de reclamar. El éxito de alcance español de autores en lenguas periféricas, como Carme Riera, Bernardo Atxaga o Manolo Rivas, constituye una contribución de la mayor importancia al incremento de la visibilidad y del prestigio de sus respectivas lenguas ante el público castellano-hablante. Estos autores y otros muchos que no cito para no alargarme muestran de forma práctica y concreta de qué hablamos cuando decimos que la defensa de la diversidad lingüística y cultural no constituye ningún lujo caprichoso de los minoritarios, sino que constituye una fuente de riqueza para todos. Un escritor de mi tierra, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, lo expresó mejor de lo que yo podría

hacer al sostener que los gallegos no sólo tenemos el derecho a reclamar respeto para nuestra lengua y cultura, sino que aun antes de ese derecho está el deber, impuesto por la humanidad en su conjunto, de cultivarlas y desarrollarlas. En todo caso, esta intervención se ofrece como una aportación al diálogo imprescindible para construir entre todos la cultura común del respeto y la convivencia.

Anexo. Datos básicos y cronología

I Datos estadísticos

Comunidades autónomas con lengua propia	Denominación de la lengua	Nº de habitantes	% de la población española	% de hablantes de la lengua propia (1ª + Bil.)	Nº de hablantes de la lengua propia (aprox.)
Cataluña	Catalán	6.147.610	15,42%	41%+16%	3.500.000
Valencia	Valenciano	4.023.441	10,09%	29%+ 8%	1.500.000
Islas Baleares	Catalán	796.483	2,00%	41%+12%	400.000
Galicia	Gallego	2.724.544	6,84%	46%+17%	1.700.000
País Vasco	Euskera	2.098.628	5,26%	11%+ 5%	350.000
Navarra	Vascuence	530.819	1,33%	6%+ 4%	50.000
Tótal		16.321.525	41,00%	46.00%	7.510.000
TOTAL ESPAÑOL		39.808.597	41,00%	18,86%	7.510.000

Comunidades autónomas con lengua propia, y porcentaje de hablantes (aproximado). Datos de 1996. En la columna de porcentaje de hablantes de la lengua propia, ofrecemos desglosados el porcentaje de los que se declaran como 'hablantes' de ésta (1ª) y el de los que se declaran 'bilingües' (Bil.).

Fuentes: Elaboración propia, a partir de Siguán y Mapa sociolingüístico de Galicia.

Observaciones: Los datos de población son del censo de 1996, las estimaciones de hablantes de las lenguas 'propias' son de tres años más tarde (Siguán, 1999). En el número de hablantes de las lenguas 'propias' sólo se incluyen los residentes en las respectivas comunidades, para establecer el cómputo total habría que incluir los hablantes que residen fuera de las respectivas comunidades autónomas, en territorios históricos fuera de España (País Vasco francés, Andorra, Rosellón...), o fronterizos (gallego de Asturias, León y Zamora; catalán de Aragón...), o en comunidades de emigrantes, tanto en España (gallegos en Madrid, País Vasco y Cataluña) como fuera de ella.

II Legislación lingüística. Cronología

1978/79. – Constitución y pre-autonomías

1978. – Constitución Española, artículo 3

- “1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”

1979. – Decretos ‘de bilingüismo’

“tiene por objeto iniciar el camino para la incorporación de la Lengua y Cultura Catalana/ Vasca/ Gallega al sistema educativo de Cataluña/ País Vasco / Galicia durante la actual situación transitoria hasta la promulgación del Estatuto de esta Comunidad Autónoma”.

1979–1983. – Estatutos de Autonomía

1979. – Estatuto de Autonomía del País Vasco, artículo 6

1. El euskera, lengua propia del País Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial de Euzkadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas.
2. Las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta la diversidad sociolingüística del País Vasco, garantizarán el uso de ambas lenguas regulando su carácter oficial, y arbitrarán y regularán las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento.
3. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.
4. La Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia es la institución consultiva oficial en lo referente al euskera.

Estatuto de Autonomía de Cataluña, artículo 3

- “1. La lengua propia de Cataluña es el catalán.
2. El idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano, oficial en todo el Estado Español.
3. La Generalidad garantizará el uso normal y oficial de los dos idiomas, adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creará las condiciones que permitan alcanzar su plena igualdad en lo que se refiere a los derechos y los deberes de los ciudadanos de Cataluña.”

1980. – Estatuto de Autonomía de Galicia, artículo 5

1. La lengua propia de Galicia es el gallego.
2. Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia, y todos tienen el derecho de conocer los y usarlos.

3. Los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas y potenciarán la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa, y dispondrán los medios necesarios para facilitar su conocimiento.
 3. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.
1982. – Ley de Integración y Amejoramiento del Régimen foral de Navarra
Artículo 9
- “1. El castellano es la lengua oficial de Navarra.
 2. El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra.
- Una ley foral determinará dichas zonas, regulará el uso oficial del vascuence, y, en el marco de la legislación general del Estado, ordenará la enseñanza de esta lengua.”
1983. – Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana
Estatuto de Autonomía de Asturias, artículo 4
- “El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y de enseñanza respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad de su aprendizaje.”
- Estatuto de Autonomía de Aragón, artículo 7
- 1982–1986. – Legislación lingüística básica de las autonomías**
1982. – Ley Básica de Normalización de Uso del Euskera
1983. – Ley de Normalización Lingüística de Cataluña
Ley de Normalización Lingüística de Galicia
Ley sobre Uso y Enseñanza del Valenciano
1986. – Ley de Normalización Lingüística de las Islas Baleares
Ley Foral del Vascuence de Navarra
1986. – Sentencias del Tribunal Constitucional español sobre los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Básica de Normalización de Uso del Euskera y la Leyes de Normalización Lingüística de Cataluña y Galicia.
- ...
1998. – Ley de Política Lingüística de Cataluña
2001. – Decreto de Uso del Vascuence en las Administraciones Públicas de Navarra

III Modelos lingüísticos en la escuela

- A: Enseñanza *en* castellano / enseñanza *de* la lengua propia (Valencia)
 B: Uso *preferente* del castellano / uso *limitado* de la lengua propia (Islas Baleares)
 C: Uso *igual* de ambas lenguas (Galicia)
 D: Uso *preferente* de la lengua propia / uso *limitado* del castellano (País Vasco)
 E: Enseñanza *en* la lengua propia / enseñanza *del* castellano (Cataluña)
- Entre paréntesis se indica la comunidad en que cada modelo es generalmente preferido. Las flechas indican que los modelos contiguos señalados tienen una fuerte presencia en el respectivo territorio.

IV Canales de televisión de titularidad autonómica

1982. – País Vasco: Euskal Telebista (dos canales, uno en euskera y otro en castellano).
 1984. – Cataluña (>Baleares): TV3 (monolingüe).
 1986. – Galicia: TVG (monolingüe).
 1989. – Valencia: Canal 9 (bilingüe).
 Cataluña: Canal 33 (monolingüe).

V Producción editorial en las diferentes lenguas de España

Año	Castellano	Catalán	Euskera	Gallego
1980	25.473	1.722	247	187
1985	30.611	3.417	375	295
1990	36.029	4.838	763	577
1995	41.301	5.793	968	1.148
2000	47.757	6.764	1.428	1.266
% incremento	+187%	+393%	+578%	+677%

Edición en las diferentes lenguas (1980–1995). Número de referencias del ISBN

Fuente: elaboración propia, a partir de Panorámica de la edición de libros en España, 1996 y 1997, y página web del Ministerio de Cultura.

Observación: En el año 2000, viene desglosada la cifra para la edición en valenciano (605 títulos) que no está incluida en las de catalán del cuadro.

Bibliografía

- Abad Licerias, José María & Carmona Cuenca, Encarnación (1999): *Leyes de normalización y política lingüística*. Madrid: Universidad Europea-Cees.
- Alvar, Manuel (coord.) (1986): *Lenguas peninsulares y proyección hispánica*. Madrid: Fundación Friedrich Ebert/Instituto de Cooperación Iberoamericana.
- Etxebarria, Maitena (2002): *La diversidad de lenguas en España*. Madrid: Espasa.
- García Negro, María del Pilar (1991): *O galego e as leis. Aproximación sociolingüística*. Pontevedra: Cumio.
- González Ollé, Fernando (1993): "Tradicionalistas y progresistas ante la diversidad idiomática de España". En: VV. AA., *Lenguas de España, Lenguas de Europa*. Madrid: Fundación Cánovas del Castillo: pp. 129–160.
- González Ollé, Fernando (1995): "El largo camino hacia la oficialidad del español en España". En: Seco, Manuel/Salvador, Gregorio (coords.): *La lengua española, hoy*. Madrid: Fundación Juan March: pp. 37–61.
- Hoffmann, Charlotte (1996a): "Language Planning at the Crossroads: the Case of Contemporary Spain". En: Hoffmann, Charlotte: *Language, Culture and Communication in Contemporary Europe*. Clevedon: Multilingual Matters: pp. 93–110.
- Hoffmann, Charlotte (1996b): "Monolingualism, Bilingualism, Cultural Pluralism and National Identity: Twenty Years of Language Planning in Contemporary Spain". En: Wright, S.: *Monolingualism and Bilingualism. Lessons from Canada and Spain*. Clevedon: Multilingual Matters; pp. 59–108.
- Lodares, José Ramón (2000): *El paraíso políglota*. Madrid: Taurus.
- Lodares, José Ramón (2001): *Lengua y patria*. Madrid: Taurus.
- Ninyoles, Rafael Lluís (1977): *Cuatro idiomas para un estado*. Madrid: Cambio 16.
- Salvador, Gregorio (1987): *Lengua española y lenguas de España*. Barcelona: Ariel.
- Siguán, Miguel (1992): *España plurilingüe*. Madrid: Alianza.
- Siguán, Miguel (1994): *Conocimiento y uso de las lenguas en España (Investigación sobre el conocimiento y uso de las lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas bilingües)*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Siguán Soler, Miguel (1999): *Conocimiento y uso de las lenguas (Investigación sobre el conocimiento y uso de las lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas bilingües)*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Vallverdú, Francesc (1992): *L'ús del català: un futur controvertit*. Barcelona: 62.
- VV. AA. (1996): *Las lenguas de España*. Sevilla: Fundación El Monte.